

DESIDIA ESPAÑOLA



Un juez norteamericano ha tenido que poner orden en el asunto, a pesar de nuestros denodados esfuerzos por conseguir que España investigase por motu propio el robo perpetrado por esta banda de modernos piratas. Ustedes recordarán el asunto de Odyssey: un tema que ocupó las portadas de todos los medios de comunicación del mundo, y en el que nuestro país aparecía con toda justicia como una tierra en la que habitaban gestores de lo público bobos y descuidados a los que se les podía roba la cartera con suma facilidad. Se han llevado 500 millones de euros, posiblemente, el mayor hallazgo submarino, pues se expoliaron durante cinco años al menos tres pecios o barcos hundidos sin que nuestras autoridades hicieran nada por evitarlo; todo lo contrario, el Ministerio de Asuntos Exteriores se empeñó en concederles varios permisos para que cartografiasen con sus artilugios electrónicos nuestro mar territorial, sin que en los diferentes barcos utilizado fuesen técnicos españoles que controlaran las operaciones.

Hace unos días, la corte de Tampa, tras cinco meses de peticiones por parte de España, que se personó allí exclusivamente por la presión mediática, para que mostrasen las monedas y objetos sacados de la mar, dada la exclusiva presencia de los barcos de Odyssey en nuestras aguas, ha permitido por fin al Ministerio de Cultura Español que pueda verificar con sus expertos si el tesoro nos pertenece, y por tanto podamos reclamarlo.

Sin embargo, este asunto de nuevo nos coge con el paso cambiado y tarde, además de que los mejores aliados de los piratas fueron los en general mediocres funcionarios de nuestro país, que se entusiasmaron con las grandezas que vendía Odyssey, sumidos como siempre en un complejo de inferioridad insoportable para encontrarnos en el siglo XXI. Ellos fueron los únicos causantes de este desastre y los verdaderos responsables de este desatino. Tanto en el Ministerio de Cultura como en el de Exteriores sucumbieron al patético Bienvenido Mister Marshal, como en aquella vieja película, aunque en ésta más real los yanquis no se limitaron a pasar corriendo y sin parar, sino que se llevaron cuanto quisieron del mar territorial español. La Junta de Andalucía, a través del Centro de Arqueología Submarina de Cádiz, también forma parte de esta trama de imbecilidad, desidia, desconocimiento, incultura y complejos de inferioridad. Pues, a parte de ir a comer con los piratas y manifestar lo que luego negaban sus hechos, son los encargados de proteger este importante patrimonio submarino que pertenece a todos los españoles.

Ahora, y como sucede siempre, también será dinero público el que pueda lograr que parte de ese tesoro regrese a España, con lo que nos habrán robado doblemente. Pero ya saben ustedes que a los políticos pagar de ese dinero es como si lo hiciese el Espíritu Santo. Y los autores de estos permisos, dirigidos por los miembros de la Oficina de Cooperación con

América dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y los responsables de cuidar de los Bienes Culturales Españoles en el de Cultura continuarán en sus puestos pagados por todos nosotros sin que nadie sea castigado por este delito de dejación de funciones, cuyo desaguizado cultural no tiene precio y su quebranto económico se acerca a los 500 millones de euros. Vamos, que estamos ante otro Prestige por el que tampoco nadie dimitirá. En España, contratar, dar de comer y utilizar a tanto mediocre nos sigue costando demasiado caro, da lo mismo que se interrumpan los servicios de trenes en Cataluña, se hunda un petrolero que destruya nuestra costa, se caiga un avión repleto de militares o se robe delante de nuestras narices el mayor tesoro de la historia.